

Casos Cochinilla y Diamante afectan imagen de municipalidades y empresas constructoras

San José, 24 Nov (Elpaís.cr).- La opinión pública costarricense ha sido golpeada este año por los casos de corrupción, Cochinilla y Diamante, y afecta directamente la confianza ciudadana en la municipalidades y empresas constructoras privadas, según la en

La última encuesta realizada por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).ha sido elaborada gracias a la colaboración de varias instancias universitarias como la Vicerrectoría de Investigación, la Oficina de Divulgación e Información, el Semanario Universidad, las Radioemisoras UCR y la Escuela de Ciencias Políticas.

Destacada que caso “Cochinilla”, fue altamente difundido por los medios de comunicación, y tuvo un alto impacto en la ciudadanía, pues un 78.7% afirmó en el mes de agosto conocer sobre este caso. (Encuesta CIEP-UCR y ECP, Agosto de 2021).

El segundo de los casos mencionados fue el caso “Diamante”, que involucró a empresas constructoras, que según las autoridades judiciales, habrían pagado dádivas a funcionarios municipales, principalmente alcaldes, para obtener condiciones ventajosas para licitaciones dentro de gobiernos locales. Esta investigación fue dada a conocer por parte de los medios de comunicación el pasado lunes 15 de noviembre, dos días antes del inicio del trabajo de campo de esta encuesta.

En este caso, más de la mitad de la población afirma conocer sobre este tema, mostrando que desde el inicio tuvo un impacto alto en la ciudadanía.

Este escenario de un caso de corrupción que implica a autoridades políticas, funcionarios públicos y empresas privadas a pocos meses de la elección nacional tiene como antecedente el caso conocido como “Cementazo” en el año 2017. En esta ocasión, más del 85% de la ciudadanía afirmó conocer sobre éste, al preguntar por el cambio de opinión, el gobierno, el poder Judicial y el presidente fueron los que más afectación experimentaron, pues más de un tercio de las personas que conocían del caso, afirmaron que su opinión había empeorado. De igual forma, la percepción ciudadana de los partidos políticos que con algún grado de implicación en este caso se vio impactada de manera negativa.

Al repetir este mismo ejercicio en la actual medición, las municipalidades y las empresas constructoras son las que más han visto afectada su imagen frente a la ciudadanía, pues más de un 50% de las personas afirman que su opinión sobre estas ha empeorado. La imagen de los partidos políticos y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes también resulto con un resultado negativo, pues un 41% de personas que afirman que su percepción ha empeorado.

Caso contrario, el Organismo de Investigación Judicial es la única institución en la que la ciudadanía reporta opiniones positivas con un 36.48% que afirma que su percepción ha mejorado como efecto de este caso. Por su parte, el gobierno y el presidente no se ven altamente afectados, pues un 58% y un 65% respectivamente afirman que no ha variado su opinión respecto a estos por el caso diamante.

Respecto a esto, es posible observar como el caso Diamante podría tener una implicación respecto a la campaña electoral actual ya que dos terceras partes de la ciudadanía afirma que este caso influye en su decisión de voto. Un 41% de las personas consideran que este caso afecta mucho en su decisión de voto, mientras que un 25% afirma que influye poco y un 34% no influye.

Otras investigaciones han sido conocidas por la opinión pública en los últimos meses, como lo es el caso Azteca, o las investigaciones que apuntan a la penetración de dineros del narcotráfico en instituciones políticas, principalmente en gobiernos locales de la zona sur del

país. Esto representa un peligro para la democracia, por lo que al preguntarle a las personas que tanto afecta el dinero del narcotráfico a ésta, un 78% afirma que afecta mucho, mientras que un 8% responde que no afecta nada.

Otro de los temas importantes en los últimos días han sido las pruebas FARO, especialmente la prueba de factores asociados, cuya aplicación fue denunciada por madres y padres de familia, así como por gremios de educadoras y educadores por la extensión y las preguntas privadas realizadas a los niños y las niñas de quinto grado. En este sentido, una mayoría de las personas considera que este cuestionario afecta mucho a la educación, y menos de un 10% de la ciudadanía responde que este no la afecta.

Fuente: *Elpaís.cr*